



# Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Distr. general  
28 de agosto de 2012  
Español  
Original: inglés

## Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

52º período de sesiones  
9 a 27 de julio de 2012

### Comunicación núm. 32/2011

#### Dictamen aprobado por el Comité en su 52º período de sesiones, 9 a 27 de julio de 2012

<i>Presentada por:</i>	Isatou Jallow (representada por la abogada Albena Koycheva)
<i>Presuntas víctimas:</i>	La autora y su hija menor de edad
<i>Estado parte:</i>	Bulgaria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	15 de noviembre de 2010 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Trasmitidas al Estado parte el 5 de mayo de 2011 (no se publicaron como documento)
<i>Fecha de adopción del dictamen:</i>	23 de julio de 2012



## Anexo

### **Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer**

#### **Comunicación núm. 32/2011, Isatou Jallow c. Bulgaria**

<i>Presentada por:</i>	Isatou Jallow (representada por la abogada Albena Koycheva)
<i>Presuntas víctimas:</i>	La autora y su hija menor de edad
<i>Estado parte:</i>	Bulgaria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	15 de noviembre de 2010 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Trasmitidas al Estado parte el 5 de mayo de 2011 (no se publicaron como documento)

*El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer*, establecido en virtud del artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

*Reunido* el 23 de julio de 2012,

*Aprueba* el siguiente:

#### **Dictamen a tenor del artículo 7, párrafo 3, del Protocolo Facultativo**

1. La autora de la comunicación es la Sra. Isatou Jallow, ciudadana de Gambia nacida el 4 de julio de 1982, que presenta la comunicación en su nombre y en el de su hija M.A.P., nacional de Gambia y de Bulgaria, nacida el 28 de octubre de 2007<sup>1</sup>. Denuncia que su hija y ella han sido víctimas de la vulneración por parte de Bulgaria de los derechos que les confieren los artículos 1, 2, 3, 5 y 16, párrafos 1 c), d), f) y g), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (la Convención). La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor en Bulgaria el 8 de mayo de 1982 y el 20 de diciembre de 2006, respectivamente. La autora está representada por una abogada, la Sra. Albena Koycheva.

#### **Los hechos expuestos por la autora**

2.1 La autora vivía antes en Gambia. Era una mujer analfabeta y sin estudios que solo sabía hablar su lengua materna e inglés a un nivel medio. En 2006 conoció a A.P., nacional búlgaro que estaba en Gambia por motivos de trabajo. En enero de 2007, A.P. volvió a Gambia. El 23 de febrero de 2007, estando la autora embarazada, se casaron. Al poco tiempo, el marido regresó a Bulgaria, dejando a la autora sola y

---

<sup>1</sup> Su hija nació en Serrekunda (Gambia). La partida de nacimiento búlgara núm. 0494 se expidió el 10 de junio de 2008.

sin medios de subsistencia. La autora dio a luz el 28 de octubre de 2007. Tras visitar Gambia en el segundo trimestre de 2008 y pese a su reticencia inicial a reconocer a la niña como hija suya, el marido declaró oficialmente el nacimiento de su hija y su matrimonio el 10 de junio y el 21 de agosto de 2008, respectivamente, para poder inscribirlos en el registro civil oficial de Bulgaria. El 28 de septiembre de 2008, la autora y su hija llegaron a Bulgaria y empezaron a vivir con el marido en Sofía.

2.2 Desde su llegada a Bulgaria, la autora tuvo problemas con su marido, que era agresivo y estaba a menudo bajo los efectos del alcohol. Trató de obligarla a participar en películas y fotografías pornográficas, a lo que la autora se negó. El marido tenía en su poder toda la documentación de la autora y empezó a someterla a violencia psicológica y física, incluidos abusos sexuales. No le dejaba salir de casa sin su consentimiento ni buscar empleo. Le repetía constantemente que su permanencia en Bulgaria dependía de él y la amenazaba con que, si se resistía, podía hacer que la encarcelaran, la ingresaran en una institución psiquiátrica o la deportaran a Gambia sin su hija. También le hacía comentarios crueles sobre su aspecto físico, su color de piel y su analfabetismo. El marido empezó a abusar de su hija y tenía fotografías pornográficas por todo el apartamento. Se masturbaba delante de la autora y de su hija y veía películas pornográficas en casa en su presencia. También enseñó a su hija a tocarle el pene.

2.3 En noviembre de 2008, el marido se puso en contacto con el Departamento de Protección del Niño y pidió a las autoridades que convencieran a la autora de que dejara de amamantar a su hija. Había insistido anteriormente con frecuencia a la autora en que quería que alimentara a su hija con comida normal para que la autora dejara de amamantarla y perdiera peso<sup>2</sup>. Cuando los asistentes sociales del Departamento visitaron el domicilio, al ver las fotografías pornográficas y enterarse de la violencia doméstica del marido, llamaron a la policía. La policía acudió inmediatamente, confiscó las fotografías e informó a la Fiscalía Regional de Sofía. Los agentes también recomendaron a la autora que se llevara a su hija y se mantuvieran alejadas de su marido, pero sin orientarla sobre a dónde podía ir, pese a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba. No se adoptaron medidas específicas para proteger a la autora y a su hija de la violencia doméstica. En consecuencia, la autora decidió llevarse a su hija y buscar refugio en un centro de la organización no gubernamental Animus Association, donde estuvieron acogidas del 7 al 9 de noviembre de 2008<sup>3</sup>. A continuación, madre e hija se trasladaron a un albergue municipal para madres con niños, donde permanecieron del 10 al 15 de noviembre de 2008. Sin embargo, el marido dio con ellas y convenció a la autora para que regresara al apartamento<sup>4</sup>.

2.4 El 30 de marzo de 2009, la Fiscalía Regional de Sofía decidió no proseguir con la investigación preliminar del presunto delito del marido por considerar que las

<sup>2</sup> Según el escrito que el marido presentó ante el Tribunal Regional de Sofía el 29 de julio de 2009, tras la negativa de la autora a alimentar a la niña con comida normal, el marido pidió a las autoridades que explicaran a la autora que la niña necesitaba otras formas de nutrición aparte de la leche materna.

<sup>3</sup> Según el certificado expedido por Animus Association, el 28 de octubre de 2008 el Departamento de Protección del Niño solicitó a esa organización que acogiera a la autora y a su hija, que se alojaron en su centro del 7 al 11 de noviembre de 2008.

<sup>4</sup> Según el certificado del albergue, presentado por la autora, ella y su hija estuvieron acogidas en el albergue del 10 al 17 de noviembre de 2008, fecha en que la autora decidió marcharse voluntariamente.

pruebas reunidas eran insuficientes para presuponer la existencia de un delito. La Fiscalía llegó a la conclusión de que las fotografías confiscadas no eran constitutivas de delito ya que formaban parte de la colección privada del marido y se habían sacado con el consentimiento de las mujeres que salían en ellas, que eran adultas. La decisión se basó en la información facilitada por la policía y los servicios sociales. Nunca se interrogó a la autora.

2.5 El 5 de junio de 2009, la autora fue admitida a un centro de crisis de Animus Association<sup>5</sup>. Unas horas después de su llegada, el centro de crisis recibió una llamada telefónica del director de un jardín de infancia, que afirmaba que el marido había tratado de obligar al jardín de infancia a aceptar a su hija, aduciendo que su madre la había dejado sola y huido al centro. La autora fue a por su hija y regresó con ella al centro. El 12 de junio de 2009, la autora y su hija regresaron a casa<sup>6</sup>. La policía acudió varias veces al domicilio para poner fin a incidentes de violencia doméstica contra la autora. Pese al peligro evidente que corrían la autora y su hija, el marido únicamente recibió advertencias verbales de los agentes.

2.6 El 6 de julio de 2009, 10 meses después de su llegada, la autora obtuvo el permiso de residencia en Bulgaria. La situación empeoró de tal manera que la autora propuso a su marido que iniciaran los trámites de divorcio. Sin embargo, él se negó ya que quería seguir teniendo la custodia de su hija.

2.7 El 27 de julio de 2009, el marido interpuso una petición ante el Tribunal Regional de Sofía a tenor de la Ley de protección contra la violencia doméstica, en la que afirmaba ser víctima de violencia psicológica y física. Aseguraba que su hija y él habían sido víctimas de la violencia doméstica en varias ocasiones y por ello solicitaba al Tribunal que dictara una orden de protección de emergencia. El 28 de julio de 2009, el Tribunal denegó la petición del marido y le dio un mes de plazo para presentar una denuncia detallada, presentar información concreta y testigos o pruebas con respecto a cada incidente violento y explicar cómo esos incidentes habían afectado a su hija. El 29 de julio de 2009, el marido interpuso una nueva petición, en la que afirmaba que la autora les había atacado e insultado a él y a su hija los días 3, 4, 5, 6, y 20 de noviembre, y 26 de diciembre de 2008, y 25, 26 y 27 de julio de 2009. Acusaba a la autora de haber intentado usar un cuchillo en una ocasión. Además afirmó que abofeteaba a su hija, incluso delante de otras personas. También acusaba a la autora de haberse peleado con gente del barrio y haber amenazado con matar a la madre del marido y a su hija y suicidarse. Adjuntaba a la petición un certificado médico de fecha 24 de noviembre de 2008 en el que se describían algunas lesiones personales que le habían causado dolor y sufrimiento. También adjuntaba una fotografía de la espalda de un menor herido. Según la autora, la niña que se mostraba en la fotografía era mucho mayor que su hija de 2 años. El marido solicitaba al Tribunal que dictara una orden de protección que prohibiera a la autora acercarse a él o a su hija y la obligara a ingresar en un hospital psiquiátrico.

---

<sup>5</sup> La autora sostiene que el marido la dejó allí contra su voluntad. Sin embargo, según el escrito que presentó ante el Tribunal Regional de Sofía, de fecha 14 de septiembre de 2009, en junio de 2009, la autora, ante la insistencia de su marido, aceptó por voluntad propia ir al centro y dejarle al cuidado de su hija para que tuviera la ocasión de darse cuenta de lo difícil que resultaba cuidar de un niño.

<sup>6</sup> Según el certificado expedido por Animus Association de fecha 19 de agosto de 2009, la autora abandonó el centro ante la insistencia de su marido.

2.8 El 29 de julio de 2009, el Tribunal Regional de Sofía, basándose en las pruebas presentadas por el marido, dictó una orden de protección de emergencia en virtud del artículo 5 de la Ley de protección contra la violencia doméstica. Entre otras medidas, el Tribunal decretó que la autora abandonara el domicilio familiar, prohibió a la autora acercarse al apartamento y concedió la custodia temporal de su hija al marido. El Tribunal consideró que la denuncia contenía indicios de que existía una amenaza inminente y directa contra la vida y la salud del marido y su hija. La orden de protección de emergencia se emitió exclusivamente sobre la base de las declaraciones del marido<sup>7</sup>. La policía ejecutó la orden de protección, notificó a la autora la solicitud de la orden y la informó sobre la futura vista ante el tribunal. Sin embargo, no se le tradujo la orden. Según la autora, la orden no se podía recurrir y tenía vigencia hasta que concluyera el procedimiento judicial iniciado en virtud de la Ley de protección contra la violencia doméstica<sup>8</sup>.

2.9 El 21 de agosto de 2009, la autora se enteró de que el marido se había llevado a su hija del apartamento. Se puso en contacto con la policía, con la Agencia Estatal de Protección del Niño y con la Fiscalía Regional de Sofía para obtener información sobre su hija e insistió en que los niños de la edad de su hija necesitaban estar cerca de su madre. La policía, consciente de que se había dictado una orden de protección de emergencia, se negó a acceder a la petición de la autora y le dijo que su marido no tenía la obligación de informarle sobre el paradero de su hija y que podía enviarla a cualquier otro lugar o encargar a otra persona que cuidara de ella. La policía también se negó a ayudarla a recuperar sus pertenencias del domicilio familiar. El 27 de agosto de 2009, la autora solicitó oficialmente información sobre su hija a la Fiscalía Regional de Sofía y a la Agencia Estatal de Protección del Niño. La Fiscalía nunca respondió a su solicitud y la Agencia Estatal remitió su queja al Departamento de Protección del Niño, que se limitó a informar a la autora de que su hija se encontraba bien y estaba al cuidado de su padre. Transcurrieron meses sin que esas instituciones adoptaran medidas o informaran a la autora acerca de las condiciones en que vivía su hija<sup>9</sup>.

2.10 El 7 de septiembre de 2009, el juez aplazó la vista inicial debido a irregularidades en la notificación y a la ausencia de un intérprete. Los días 16 y 18 de septiembre y 15 de octubre de 2009 se celebraron vistas en presencia de la autora, su abogada, un representante de los servicios sociales y un intérprete. En la primera

<sup>7</sup> De conformidad con el artículo 13 3) de la Ley de protección contra la violencia doméstica, cuando no existan otras pruebas, el tribunal dictará una orden de protección basada exclusivamente en la declaración en virtud del artículo 9 3), que estipula que también se adjuntará una declaración del solicitante sobre la violencia en virtud de la sección 8, punto 1, que estipula que podrán iniciarse actuaciones para emitir una orden basada en la solicitud de la víctima. Cabe señalar que las partes no aportan ninguna disposición legislativa.

<sup>8</sup> De conformidad con el artículo 19 de la Ley de protección contra la violencia doméstica, toda orden de protección de emergencia tendrá vigencia hasta que el tribunal dicte una orden de protección o deniegue la solicitud o petición.

<sup>9</sup> Según la información que figura en el expediente del caso, facilitada por la autora, al parecer, según un informe de la Agencia Estatal de Protección del Niño, el 10 de septiembre de 2009 se comunicó a la abogada de la autora que la Agencia Estatal había pedido a la policía que investigara y respondiera a la solicitud de información de la autora sobre el paradero y el estado de la niña. Además, el 1 de septiembre de 2009 el marido informó al Tribunal Regional de Sofía de que había decidido llevarse a la niña, por su seguridad, a la casa de un buen amigo, que vivía en el municipio de Kostenets, donde él pasaría los fines de semana. El marido indicó además que ni las autoridades municipales ni las organizaciones no gubernamentales le podían ofrecer acceso rápido a un jardín de infancia para la pequeña.

vista, la autora solicitó que se levantara la orden de protección de emergencia que la mantenía alejada de su hija. Negó las acusaciones en su contra y alegó que la orden no estaba sustentada en pruebas suficientes y no cumplía los requisitos establecidos en la Ley de protección contra la violencia doméstica. Afirmó que, en la situación de vulnerabilidad en que se hallaban, su hija y ella habían sido víctimas de violencia psicológica y física a manos de su marido. No le había denunciado anteriormente porque desconocía la legislación. La autora sostiene también que en el informe técnico preparado por el Departamento de Protección del Niño sobre la capacidad del padre de cuidar de la niña, que se presentó al Tribunal, no se mencionaban los incidentes de violencia doméstica ni el material pornográfico del marido. Tampoco se analizaba la capacidad de la autora para cuidar de su hija ni las consecuencias que podía tener en la vida de la niña la ausencia de su madre.

2.11 El 23 de diciembre de 2009, el Tribunal Regional de Sofía desestimó la petición del marido y su solicitud de una orden de protección permanente por falta de pruebas. El certificado médico de fecha 24 de noviembre de 2008 presentado por el marido fue rechazado de conformidad con la sección 10 de la Ley de protección contra la violencia doméstica, que estipula que las solicitudes deben presentarse en el plazo de un mes desde que se produjo el acto de violencia doméstica. Sin embargo, como el marido recurrió la decisión del Tribunal, la orden de protección de emergencia en contra de la autora siguió teniendo vigencia<sup>10</sup>. Cuando la autora siguió intentando ver y cuidar a su hija la Agencia Estatal de Protección del Niño la informó de que el padre se ocupaba debidamente de su hija<sup>11</sup>.

2.12 En el tercer trimestre de 2009, el marido inició el procedimiento de divorcio en el Tribunal Regional de Sofía, en que solicitaba la custodia de su hija.

2.13 El 25 de enero de 2010, la autora presentó una solicitud de medidas cautelares con respecto a la custodia de su hija en el marco del procedimiento de divorcio. Informó al Tribunal de que si bien estaba dispuesta a divorciarse, no estaba de acuerdo con los motivos aducidos por el marido. El 14 de febrero de 2010, su marido y su hija la visitaron. El marido se comportó de manera agresiva y estaba

<sup>10</sup> De conformidad con el artículo 17 2) de la Ley de protección contra la violencia doméstica, el recurso no debía suspender la ejecución del fallo.

<sup>11</sup> El 20 de enero de 2010, la autora presentó una nueva solicitud de información a la Agencia Estatal. El 1 de febrero de 2010, la Agencia Estatal informó a la autora de que asistentes sociales comprobaban periódicamente el estado de la niña y habían ayudado al padre a inscribirla en un jardín de infancia. La niña tenía asignado un médico de cabecera y en su historial no aparecía ninguna enfermedad. El apartamento en que vivía la niña parecía estar limpio, con un ambiente adecuado. La niña había empezado a hablar, en búlgaro. El padre contaba con la ayuda de su madre para cuidar de la niña, que no mostraba signos de ser víctima de violencia. Asimismo, se informó a la autora de que podía solicitar más información a la oficina de distrito del Departamento de Protección del Niño, pero debía ir acompañada de un intérprete. Además, la Agencia Estatal solicitó por escrito al Departamento que hiciera un seguimiento del caso y ayudara a la autora a obtener información. El 15 de febrero de 2010, la oficina de distrito del Departamento de Protección del Niño envió una carta a la autora en que explicaba que no había podido hacerle llegar información hasta ese momento porque no tenía su dirección. La carta confirmaba la información facilitada por la Agencia Estatal. La niña había pasado una temporada fuera de Sofía, en casa de unos amigos de su marido. El marido había pasado con ellos los fines de semana y decidió volver a traer a la niña a Sofía antes del invierno. El 7 de diciembre de 2009, pidió ayuda para inscribir a la niña en un jardín de infancia. Se informó a la autora de que su marido no se oponía a que visitara a la niña, siempre y cuando las visitas fueran reguladas. Finalmente, se convocó a la autora a que acudiera a la oficina de distrito del Departamento de Protección del Niño acompañada de un intérprete.

bajo los efectos del alcohol. Montó una escena y gritó y golpeó a la autora varias veces delante de su hija, que se puso a llorar. No había nadie presente que pudiera ayudarla. La autora consultó a un médico, pero no podía permitirse pagar el costo de un certificado médico que diera fe de la violencia física.

2.14 El 15 de marzo de 2010 se celebró la vista de divorcio en el Tribunal Regional de Sofía. El Tribunal recibió un nuevo informe técnico del Departamento de Protección del Niño que contenía información más detallada sobre la niña y la capacidad de ambos progenitores para cuidar de ella. Se consideraron con la máxima atención los intereses de la menor y estuvo presente un asistente social del Departamento. Tras escuchar a las partes y al asistente social, el juez recomendó encarecidamente a las partes y a sus abogados que trataran de llegar a un acuerdo. Dos horas después de que concluyera la vista, agentes de inmigración visitaron a la autora para verificar su dirección y su empleo.

2.15 A pesar de que las autoridades no les habían protegido eficazmente a ella y a su hija y pese al hostigamiento y la violencia que había padecido, la autora se sintió obligada a aceptar el divorcio (de mutuo acuerdo) porque pensó que era la única manera de recuperar la custodia de su hija. Aceptó casi todas las condiciones desfavorables que le imponía su marido<sup>12</sup>. El 22 de marzo de 2010, el Tribunal aprobó el divorcio y el convenio regulador de la custodia, que se otorgó a la madre<sup>13</sup>.

2.16 La autora afirma que agotó todos los recursos internos disponibles.

### **La denuncia**

3.1 La autora afirma que el Estado parte contravino los artículos 1, 2, 3, 5 y 16, párrafo 1, apartados c), d), f) y g), de la Convención como resultado del trato discriminatorio que ella y su hija, como mujeres, recibieron de las autoridades, así como al no protegerlas de la violencia doméstica basada en el género y no castigar al agresor.

3.2 La autora sostiene que el hecho de que el Estado parte no prevenga la violencia doméstica afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, en contravención de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. Afirma que el Estado parte no considera que la violencia doméstica constituya una amenaza real y grave. Su legislación y la práctica de las instituciones públicas, incluido el sistema judicial, no reconocen la violencia basada en el género. Por ejemplo, la Ley de protección contra la violencia doméstica no contiene medidas especiales de protección para las mujeres o las madres, pese a que en la gran mayoría de los casos los demandantes son mujeres y sus hijos y los agresores son hombres.

3.3 En cuanto a las presuntas violaciones del artículo 2, se argumenta que el Estado parte no ha adoptado medidas para introducir disposiciones legislativas con respecto a la violencia contra la mujer, en particular la violencia psicológica. Además, la práctica judicial y las normas procesales no reconocen claramente esta

<sup>12</sup> El expediente del caso no contiene más detalles o documentación con respecto a las supuestas condiciones desfavorables que le impuso el marido para concederle el divorcio.

<sup>13</sup> Según la decisión del Tribunal, el padre tenía derecho a tener contacto con la niña el primer y el tercer fin de semana del mes, de las 10.00 horas del sábado a las 18.00 horas del domingo. En verano, tenía derecho a pasar un mes con la niña. Además, tenía que pagar una pensión alimenticia por la niña de 50 euros al mes.



forma de violencia. La Ley de protección contra la violencia doméstica y la Ley de protección de los niños no contienen consideraciones de género pese a que en la mayor parte de los casos las víctimas son mujeres y niñas y los agresores son hombres. En el marco de los procedimientos judiciales de violencia doméstica, los jueces aplican de manera arbitraria el requisito jurídico de demostrar que la vida del demandante corre un peligro directo e inmediato al basar su decisión únicamente en la declaración del demandante. Los jueces no están autorizados a reconsiderar una orden de protección de emergencia cuando se reúnen nuevas pruebas o cuando el demandado presta declaración ante el tribunal<sup>14</sup>. Los tribunales están obligados a cerrar el caso en una única vista y anunciar la decisión definitiva a las partes inmediatamente. Por consiguiente, el Estado parte no ha cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de los apartados f) y g) del artículo 2.

3.4 La autora argumenta que el ejercicio y el goce de sus derechos y los de su hija se vieron afectados por el hecho de que el Estado parte no adoptara las medidas apropiadas, en contravención del artículo 3 de la Convención. Carecía de acceso o tenía un acceso limitado a las instituciones que se ocupan de los asuntos relativos a la violencia por motivos de género (la policía, los tribunales, el sistema de salud y la Agencia Estatal de Protección del Niño) porque su desconocimiento del búlgaro le impedía acudir a ellas directamente a menos que contratara los servicios de un intérprete y corriera con los gastos. No podía tener acceso a servicios médicos forenses porque las víctimas de la violencia doméstica no tienen derecho a servicios de atención médica o certificados médicos forenses gratuitos, ni tampoco a asistencia jurídica. Todo esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en particular las de clase social baja y pocos ingresos, que dependen de su pareja cuando, en muchos casos, el agresor es precisamente su pareja. El Estado parte tampoco adoptó medidas apropiadas para proteger a las mujeres, especialmente a las madres, de la violencia doméstica. La legislación y la práctica de las autoridades no reconocen muchas formas de violencia contra la mujer, lo que hace que las mujeres no estén en condiciones de igualdad con los hombres y que la maternidad no esté protegida. Las víctimas no reciben un apoyo efectivo. Pese a la insistencia de la autora, la Agencia Estatal de Protección del Niño nunca cuestionó que se obligara a la madre y su hija a separarse. Se argumenta, además, que muchas mujeres víctimas no piden protección a las instituciones públicas en parte por el estigma que ello les puede acarrear y la reacción negativa en general de la sociedad, y porque, cuando acuden a las autoridades, estas muchas veces no les ofrecen protección adecuada. Cuando la víctima solicita una investigación penal, generalmente la respuesta de la Fiscalía es que la víctima debería acudir a un juzgado de lo civil y solicitar protección a tenor de la Ley de protección contra la violencia doméstica. El Estado parte tampoco ha impartido capacitación al personal policial y judicial con respecto a la violencia doméstica contra las mujeres, en particular las madres.

3.5 En relación con la presunta violación del artículo 5, se indica que las autoridades están totalmente convencidas de que ya se ha logrado la igualdad entre mujeres y hombres. En debates públicos se ha expresado la inquietud de que las mujeres puedan valerse indebidamente de la Ley de protección contra la violencia doméstica en perjuicio de los hombres, pero nunca que pueda ser el hombre el que lo haga. Los procedimientos judiciales relativos a la custodia de los hijos suelen

---

<sup>14</sup> Según la sección 17 2) de la Ley de protección contra la violencia doméstica, la apelación no debería detener la ejecución del fallo. Si bien la Ley no contiene ninguna disposición sobre esa afirmación, la autora sostiene que en la práctica los tribunales actúan de esa manera.



durar más de un año. No hay ningún mecanismo efectivo para seguir de cerca el estado del niño y los cuidados que recibe del padre, de la madre o de ambos progenitores. La interpretación literal de las disposiciones relativas a la igualdad de derechos de los padres prima sobre otras nociones, como el interés superior del niño. En este contexto, no se está atribuyendo la debida importancia a la maternidad como función social.

3.6 Se sostiene también que el Estado parte incumplió las obligaciones que le impone el artículo 16, párrafo 1, apartados c), d), f) y g), de la Convención. Estando casada, se separó a la autora de su hija y se le negó cualquier información sobre ella. Pese a su insistencia, diversas instituciones públicas no tuvieron en cuenta su extrema vulnerabilidad y el riesgo real que corría de perder el vínculo afectivo con su hija. De igual modo, esas instituciones se negaron a proporcionarle protección y a ayudarla a establecer contacto con su hija, incluso después de que les advirtiera de que el padre podía estar abusando sexualmente de su hija. Además, los informes técnicos presentados por las autoridades como parte del procedimiento judicial iniciado con arreglo a la Ley de protección contra la violencia doméstica contenían únicamente la información facilitada por el padre y no tenían en cuenta los factores que anteceden ni el hecho de que la autora estaba bajo el control absoluto de su marido. Por consiguiente, sus derechos como esposa y como madre no fueron reconocidos ni se protegieron, por lo que la autora se vio en la situación de tener que aceptar todas las condiciones que le imponía su marido para obtener el divorcio y recuperar la custodia de su hija.

3.7 En cuanto al recurso, la autora solicita una compensación justa, una pensión alimenticia adecuada y asistencia jurídica, así como una reparación acorde con los daños físicos y mentales causados a ella y a su hija y con la gravedad de la violación de sus derechos. Además, la autora solicita medidas eficaces para garantizar su seguridad.

3.8 La autora solicita también que el Estado parte adopte medidas concretas para cambiar la ley y la práctica en el Estado parte a fin de crear una protección efectiva para las mujeres víctimas de la violencia de género. Esas medidas incluyen la capacitación de magistrados y autoridades en general y servicios gratuitos de asistencia letrada y traducción para las víctimas.

### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

4.1 El 11 de julio de 2011, el Estado parte refutó la admisibilidad de la comunicación. Señaló que las afirmaciones de la autora eran infundadas y que la interposición de una denuncia ante un tribunal a tenor de la Ley de protección contra la violencia doméstica era un procedimiento especial que no excluía otros procedimientos de carácter civil, administrativo y penal que podían determinar la responsabilidad del presunto agresor.

4.2 El Estado parte sostiene que ha adoptado medidas adecuadas para cumplir con las obligaciones que le imponen la Convención y otros instrumentos jurídicos fundamentales con respecto a la discriminación, principalmente la normativa y la reglamentación de la Unión Europea. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio constitucional y constituye la base del funcionamiento de la vida social y política. Este principio comprende la igualdad de derechos en el matrimonio y en lo que respecta a la custodia de los hijos. Como parte del cumplimiento de estas obligaciones internacionales, se establecieron mecanismos institucionales como la

Comisión para la Protección contra la Discriminación y la Agencia Estatal de Protección del Niño.

4.3 Las autoridades del Ministerio del Interior que se ocuparon del caso de la autora actuaron de conformidad con sus atribuciones y no dispensaron a la autora un trato discriminatorio. La autora recibió toda la asistencia necesaria de la policía de conformidad con la Ley de protección contra la violencia doméstica.

4.4 El 7 de noviembre de 2011, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, reitera que existen diversos medios de protección contra la violencia doméstica y la discriminación que se rigen por el Código Penal, la Ley de protección contra la violencia doméstica y la Ley de protección contra la discriminación, entre otros instrumentos jurídicos. La autora, en calidad de víctima de discriminación por motivos de género, podía haber presentado una denuncia a la Comisión para la Protección contra la Discriminación, con arreglo a la Ley de protección contra la discriminación. Las víctimas también tienen derecho a incoar acciones judiciales especiales contra la discriminación para conseguir que cesen las prácticas discriminatorias contra ellas y recibir una indemnización por la violación de sus derechos.

4.5 El Estado parte sostiene que cuenta con políticas permanentes y específicas contra la violencia doméstica. En este sentido, el 29 de marzo de 2005 promulgó la Ley de protección contra la violencia doméstica, en que se define la violencia doméstica<sup>15</sup>. La Ley ofrece protección a una amplia gama de personas en diversas situaciones, con respecto a cuestiones como el matrimonio, la tutela y la custodia de los hijos.

4.6 Las víctimas de la violencia doméstica pueden solicitar protección en virtud de la Ley de protección contra la violencia doméstica. El procedimiento es de tipo jurídico-administrativo. Contiene elementos de un proceso penal pero se mantiene en el marco de un procedimiento civil, lo que permite trasladar la carga de la prueba en favor de las víctimas. El tribunal puede imponer al presunto agresor una serie de medidas por un período de un mes a un año. El tribunal debe dictar sentencia en el plazo de un mes. Cuando la vida o la salud de la víctima corren serio peligro, se puede dictar inmediatamente una orden de protección de emergencia (en un plazo de 24 horas conforme a un procedimiento judicial a solicitud de parte). Los documentos publicados por las organizaciones que trabajan en apoyo de las víctimas de la violencia doméstica son una prueba admisible.

4.7 Además de la protección especial conforme a la Ley de protección contra la violencia doméstica, el Código Penal también otorga protección a las víctimas de la violencia doméstica si el acto de violencia está tipificado como delito. En muchos casos, hay disposiciones que prevén expresamente las circunstancias en que la víctima y el agresor son cónyuges, y la relación estrecha entre la víctima y el agresor puede ser considerada una circunstancia agravante. De conformidad con el artículo 152, párrafo 1, del Código Penal, obligar a una mujer a mantener relaciones

---

<sup>15</sup> De conformidad con el artículo 2 de la Ley de protección contra la violencia doméstica, se entiende por violencia doméstica todo acto de violencia física, psicológica o sexual, y toda tentativa de cometer un acto de violencia de ese tipo, así como la limitación por la fuerza de la libertad personal y de la privacidad, que se comete contra personas con las que el agresor tiene o ha tenido vínculos familiares o de parentesco, o cohabita o reside en el mismo domicilio.

sexuales en contra de su voluntad es delito aunque el agresor y la víctima estén casados o estén en una situación de cohabitación conyugal *de facto*.

4.8 El Estado parte, junto con las organizaciones no gubernamentales pertinentes y los medios de comunicación, lleva a cabo campañas públicas e iniciativas para concienciar a la población sobre la violencia doméstica. Estas actividades se encuadran en el programa nacional de prevención y protección contra la violencia doméstica, que se lleva a cabo anualmente. Además, en virtud de los acuerdos celebrados entre el Ministerio del Interior y las organizaciones no gubernamentales, se han realizado muchos proyectos conjuntos dirigidos a fomentar la prevención de la violencia por motivos de género y la trata de personas.

### **Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

5.1 La autora presentó sus comentarios a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo el 24 de noviembre de 2011. Señala que las observaciones del Estado parte no hacen referencia a los hechos del caso y, por consiguiente, no rebaten sus afirmaciones ni aportan pruebas que las refuten. También presenta el fallo final del Tribunal de la Ciudad de Sofía de 14 de marzo de 2011, en que el Tribunal desestimó la apelación de su marido y declaró que el fallo del Tribunal Regional de Sofía de 23 de diciembre de 2009 era efectivo y final.

5.2 La autora afirma que el Estado parte no indicó las garantías jurídicas de protección especial para las madres y los niños en los casos de violencia doméstica ni cómo protegía la maternidad. Reitera su argumentación previa de que la Ley de protección contra la violencia doméstica no contiene consideraciones de género y señala que, dado que no hablaba búlgaro, en la práctica no tenía acceso a los tribunales.

5.3 Los jueces y el personal de mantenimiento del orden no han recibido la preparación necesaria para detectar la violencia doméstica basada en el género y responder con urgencia en esos casos. En el caso que nos ocupa, el juez del Tribunal Regional de Sofía no fue capaz de evaluar adecuadamente la solicitud del marido de una orden de protección ni las consecuencias que tendría esa orden para su hija. Durante el tiempo que la autora y su hija estuvieron separadas, la autora pidió ayuda a numerosas autoridades, de las que solo recibió la respuesta estereotípica de que el padre tenía los mismos derechos que ella como progenitor. Es más, el juez nunca tuvo en cuenta las alegaciones de violencia presentadas por la autora, incluso después de recibir pruebas escritas de los antecedentes penales del marido.

5.4 La autora rebate la afirmación del Estado parte de que no agotó todos los recursos internos. El procedimiento judicial y la orden de protección de emergencia tuvieron una duración superior a la establecida por la ley. El tribunal de primera instancia debería haber conocido del asunto en un mes y, sin embargo, el procedimiento duró cinco meses. El tribunal de segunda instancia debía celebrar las vistas en un plazo de 14 días. Cuando la autora presentó su comunicación al Comité (al cabo de 14 meses), la causa seguía pendiente, de manera que el recurso se ha prolongado excesivamente. Dado que otros procedimientos no protegen a las víctimas de la violencia doméstica y, en el marco de esos procedimientos, la autora no podía solicitar protección para su hija, no constituyen un recurso efectivo.

5.5 El 5 de enero de 2012, la autora hizo llegar comentarios adicionales al Comité. Afirma que ninguna de las leyes mencionadas por el Estado parte, incluida la Ley de protección contra la violencia doméstica, contiene disposiciones con respecto a la protección efectiva de las víctimas de la violencia doméstica que dependen del agresor.

5.6 Sostiene que las autoridades no le brindaron protección en el marco de la Ley de protección de los niños. En varias ocasiones, la autora pidió ayuda a la Agencia Estatal de Protección del Niño para averiguar dónde había escondido el padre a su hija. Dado que las autoridades eran conscientes de que la autora y su hija eran víctimas de la violencia doméstica, se hallaban en una situación de vulnerabilidad y dependían del agresor, no actuaron con la diligencia debida para proporcionarles la máxima protección efectiva prevista en la ley. El Director de la Dirección General de Asistencia Social estaba facultado para iniciar el procedimiento para que se dictara una orden de protección en virtud de la Ley de protección contra la violencia doméstica, pero no lo hizo<sup>16</sup>. En consecuencia, las autoridades del Estado parte dieron máxima prioridad a los derechos del padre como progenitor, sin consideración alguna al perjuicio que ello suponía para la autora y su hija.

5.7 La autora pone de relieve que en las observaciones del Estado parte se hace hincapié en que el marido también había presentado denuncias contra la autora y, sin embargo, no se tiene en cuenta el resultado de esas denuncias ni su objetivo principal y último. Esto pone de manifiesto que las autoridades están mucho más predispuestas a confiar en un marido o padre antes que en una esposa o madre. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Regional de Sofía no estaba en posición de determinar a quién se debía proteger de la violencia doméstica ni, por consiguiente, de dictar la orden de protección de emergencia que solicitó su marido.

5.8 El Estado parte demuestra tener arraigados estereotipos en relación con la violencia doméstica, sin tener en cuenta consideraciones de género, e ignora el hecho de que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y en la mayoría de los casos a madres. Por consiguiente, la ley se aplica de una manera que pretende ser igual para hombres y mujeres, a pesar de que obviamente sus efectos son inadecuados<sup>17</sup>.

### **Comentarios adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad**

6.1 En otro escrito presentado el 27 de enero de 2012, el Estado parte reitera que la comunicación de la autora es inadmisibles porque no agotó los recursos internos de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo y argumenta que no consta en ningún registro que la autora solicitara que se investigaran circunstancias de presunta violencia doméstica o discriminación por razón de género. El Estado parte señala que el sistema judicial búlgaro ofrece protección clara y efectiva en los casos de violencia doméstica.

6.2 El Estado parte reitera que se han puesto en marcha distintas iniciativas para crear conciencia sobre la violencia doméstica y dar a conocer los procedimientos de

---

<sup>16</sup> De conformidad con el artículo 8 2) de la Ley de protección contra la violencia doméstica, el procedimiento para dictar una orden puede iniciarse a instancias del Director de la Dirección General de Asistencia Social.

<sup>17</sup> La autora hace referencia a las recomendaciones generales del Comité núm. 19, párr. 11, y núm. 28, párr. 37.

protección. Los servicios sociales ofrecen apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos, por medios como los centros de crisis y las unidades maternoinfantiles, que ofrecen a las víctimas de la violencia diversos tipos de apoyo durante seis meses, incluidos apoyo social y psicológico y asesoramiento jurídico, y proporcionan alojamiento temporal por un período máximo de seis meses a mujeres embarazadas y madres en riesgo de abandonar a sus hijos.

6.3 La Constitución y la legislación protegen los derechos de los extranjeros. En abril de 2010 se modificó el Código de Procedimiento Penal para garantizar que cualquier encausado que no sepa hablar búlgaro tenga acceso a la asistencia necesaria. El Estado parte ha puesto en marcha diversas iniciativas para informar sobre el derecho a recibir asistencia letrada en idiomas extranjeros. Se afirma asimismo que la autora no se puso en contacto con la Agencia Estatal para los Refugiados ni con la Dirección General de Migración del Ministerio del Interior, que se ocupan de los asuntos relacionados con la migración.

### **Deliberaciones del Comité: examen de la admisibilidad**

7.1 De conformidad con el artículo 72, párrafo 4 de su reglamento, el Comité considerará la aplicabilidad de los argumentos de admisibilidad indicados en los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo Facultativo antes de considerar las cuestiones de fondo de la comunicación.

7.2 De conformidad con el artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que la cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a ningún otro procedimiento de investigación o solución internacional.

7.3 El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la autora no ha agotado los recursos internos dado que los procedimientos para solicitar protección frente a la violencia doméstica a tenor de la Ley de protección contra la violencia doméstica no impiden a la autora presentar una solicitud o una denuncia de carácter civil, penal o administrativo en el marco de otros procedimientos previstos en el Código Penal y en la Ley de protección contra la discriminación. El Comité observa también los argumentos de la autora de que el procedimiento judicial iniciado con arreglo a la Ley de protección contra la violencia doméstica se prolongó excesivamente y de que los otros procedimientos mencionados por el Estado parte no están concebidos para proteger a las víctimas de la violencia doméstica. El Comité observa además el argumento de la autora que no tuvo ningún otro recurso disponible, ya que otras actuaciones no protegen a las víctimas de la violencia doméstica y no pudo solicitar protección específica para su hija.

7.4 La Comisión observa que, al menos en una ocasión, aconsejada por la policía, la autora se quedó en un albergue para víctimas de la violencia doméstica. Observa también que en diversas ocasiones la autora se puso en contacto con la policía, el Departamento de Protección del Niño y la Fiscalía Regional de Sofía para obtener información sobre el paradero y el bienestar de su hija y proteger sus intereses. El Comité observa que las autoridades no adoptaron ninguna medida para resolver sus preocupaciones, y que por el contrario, el 30 de marzo de 2009, la Fiscalía Regional de Sofía decidió no proseguir con la investigación preliminar del presunto delito del marido, sin escuchar a la autora.

7.5 El Comité observa que, el 29 de julio de 2009, el Tribunal Regional de Sofía aprobó la petición del marido de la autora de que se dictara una orden de protección

de emergencia, imponiéndose así a la autora la obligación de separarse de su hija sin posibilidad de apelación. Además, el Comité observa que, aunque el 23 de diciembre de 2009 se rechazó la petición del marido de una orden de protección permanente con arreglo a la Ley de protección contra la violencia doméstica, la orden de protección de emergencia que obligaba a la autora a separarse de su hija tenía vigencia hasta que concluyera el procedimiento de apelación iniciado por el marido conforme a la mencionada ley. Cuando la autora presentó su comunicación, casi 14 meses después de que se iniciara el procedimiento, seguía pendiente la decisión final, que se adoptó finalmente el 14 de marzo de 2011, fecha en que el Tribunal de la Ciudad de Sofía desestimó la apelación del marido de la autora y declaró que el fallo del Tribunal Regional de Sofía de 23 de diciembre de 2009 era efectivo y final. El Comité observa que el Estado parte no ha justificado la duración del procedimiento y que, por tanto, la demora no es atribuible a la autora.

7.6 Al no tener detalles sobre los recursos que el Estado parte afirma que habrían estado a disposición de la autora en las circunstancias de su caso ni explicaciones adecuadas sobre cómo esos recursos hubieran sido efectivos para proteger los derechos de la autora y su hija, y considerando que las autoridades no adoptaron ninguna medida para atender las preocupaciones de la autora sobre la violencia doméstica comunicada y la protección de su hija, el Comité considera que es poco probable que los recursos a que se refiere el Estado parte hubieran supuesto un remedio efectivo para la autora y su hija, y por tanto, llega a la conclusión de que el artículo 4, párrafo 1 del Protocolo Facultativo no le impide considerar la comunicación.

7.7 El Comité toma nota de que el Estado parte sostiene que la comunicación ha de considerarse inadmisible porque las afirmaciones de la autora son manifiestamente infundadas y no están suficientemente justificadas. Sin embargo, el Comité considera que la autora ha justificado suficientemente sus afirmaciones a los efectos de la admisibilidad, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 4, párrafo 2 c), del Protocolo Facultativo, por lo que procede a examinar el fondo de la cuestión.

### **Examen del fondo**

8.1 El Comité ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información puesta a su disposición por la autora y por el Estado parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

8.2 El Comité toma nota de las afirmaciones de la autora de que el Estado parte no le proporcionó la misma protección contra la violencia doméstica que a su marido. A diferencia de la petición de su marido con arreglo a la Ley de protección contra la violencia doméstica, que sí se tramitó debidamente, en su caso, las autoridades del Estado parte no actuaron con la diligencia debida para darle una protección efectiva y tener en cuenta su situación de vulnerabilidad, al ser una migrante analfabeta con una hija pequeña, que no sabía hablar búlgaro ni tenía parientes en el Estado parte. Asimismo, toma nota del hecho de que no se le tradujo a la autora la orden de protección de emergencia. El Comité también toma nota de la alegación de la autora de que los procedimientos, innecesariamente prolongados, con arreglo a la Ley de protección contra la violencia doméstica, en particular las demoras y el hecho de que se dictara una orden de protección permanente, después de que se dictara una orden de emergencia sin escuchar a las partes ni posibilidad de recurrirla, eran de

carácter discriminatorio. Toma nota además del argumento de la autora de que los procedimientos judiciales relativos a la custodia de los hijos suelen durar más de un año, y no hay ningún mecanismo efectivo para seguir de cerca el estado de un niño y los cuidados que recibe del otro progenitor. El Comité también toma nota de la afirmación de la autora de que, debido a la falta de protección efectiva, se sintió obligada a aceptar el divorcio de mutuo acuerdo en condiciones desfavorables para poder recuperar la custodia de su hija.

8.3 El Comité toma nota de las observaciones del Estado parte de que las autoridades que se ocuparon del caso de la autora actuaron de conformidad con sus atribuciones, no dispensaron a la autora un trato discriminatorio y le suministraron la asistencia necesaria. También toma nota de la afirmación del Estado parte de que su sistema jurídico puede ofrecer una protección clara y efectiva en casos de violencia doméstica y se han puesto en marcha distintas iniciativas para crear conciencia sobre la violencia doméstica y dar a conocer los procedimientos de protección.

8.4 El Comité observa también que en noviembre de 2008, cuando su marido llamó a asistentes sociales del Departamento de Protección del Niño para que la convencieran de que dejara de amamantar a su hija, la autora los informó de que su hija y ella habían sido sometidas a actos de violencia psicológica y física por parte de su marido. Observa que la policía, a la que llamaron los trabajadores sociales, recomendó que la autora y su hija buscaran protección en un refugio, lo que hicieron del 7 al 15 de noviembre de 2008. Aunque la policía y la Fiscalía fueron informadas por los asistentes sociales de las afirmaciones de la autora sobre la violencia doméstica, limitaron su investigación a las fotografías pornográficas del marido y no escucharon a la autora en su procedimiento previo a la investigación. Además, las autoridades del Estado parte no investigaron ni emprendieron acciones en relación con la presunta violencia doméstica contra la autora y su hija, pese a que el Director de la Dirección General de Asistencia Social está facultado para iniciar un procedimiento en virtud del artículo 8 de la Ley de protección contra la violencia doméstica<sup>18</sup>. El Comité recuerda que en su recomendación general núm. 19 (1992) se afirma que la definición de la discriminación consagrada en el artículo 1 de la Convención incluye la violencia basada en el género, que la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre y que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia<sup>19</sup>. Asimismo, con arreglo a lo establecido en la recomendación general núm. 28 (2010), los Estados partes están obligados a reaccionar activamente ante la discriminación contra la mujer. En el presente caso, el Comité considera que las acusaciones de violencia doméstica de la autora reunidas por los asistentes sociales y transmitidas a la policía en noviembre de 2008 no fueron seguidas por una investigación adecuada y oportuna, bien en ese momento o en el contexto de las actuaciones sobre violencia doméstica instituidas por su marido. En consecuencia, el Comité ha llegado a la conclusión de que el Estado

<sup>18</sup> El artículo 8 2) de la Ley de protección contra la violencia doméstica dispone que el procedimiento para dictar una orden puede iniciarse a instancias del Director de la Dirección General de Asistencia Social.

<sup>19</sup> Véase la comunicación núm. 5/2005, *Sahide Goekce (fallecida) c. Austria*, dictamen adoptado el 6 de agosto de 2007; comunicación núm. 6/2005, *Fatma Yildirim (fallecida) c. Austria*, dictamen adoptado el 6 de agosto de 2007.



parte ha incumplido las obligaciones que le imponen el artículo 2, apartados d) y e), interpretados junto con los artículos 1 y 3 de la Convención.

8.5 El Comité observa además que la petición que presentó el marido al Tribunal Regional de Sofía los días 27 y 29 de julio de 2009 dio lugar a que el 29 de julio de 2009 el Tribunal dictara una orden de protección de emergencia que obligó a la autora y a su hija a estar separadas hasta que el Tribunal Regional, en actuaciones diferentes, aprobó el acuerdo de divorcio el 22 de marzo de 2010, otorgándole la custodia de su hija. El Comité observa que al dictar la orden de protección de emergencia, por la que se determinó la custodia temporal de la hija de la autora, el Tribunal se basó únicamente en las declaraciones del marido y no tuvo en cuenta los incidentes de violencia doméstica denunciados por la autora durante la visita de los trabajadores sociales ni sus repetidas solicitudes de ayuda de la policía para protegerse a sí misma y a su hija, o no fue informado de ello por las autoridades competentes. El Comité observa también que el procedimiento de primera instancia duró casi cinco meses, y que, a pesar de que la autora lo solicitó, no se levantó la orden de protección de emergencia, ni siquiera después de que el tribunal de primera instancia hubiera desestimado la petición del marido de que se dictara una orden de protección permanente. Durante todo ese tiempo, la autora recibió información limitada con respecto al paradero y el estado de su hija, y no pudo obtener más información porque no había servicios de interpretación. El Comité considera también que el Estado parte no dio una explicación razonable sobre por qué no se anuló la orden de protección de emergencia cuando el Tribunal Regional de Sofía desestimó, el 23 de diciembre de 2009, la petición del marido de que se dictara una orden de protección permanente ni sobre por qué, dadas las circunstancias del presente caso, tomó tanto tiempo el procedimiento de apelación. Habida cuenta de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban la autora y su hija, en particular debido al hecho de que la autora es una migrante analfabeta que no habla búlgaro ni tiene parientes en el Estado parte, el Comité ha llegado a la conclusión de que el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le imponen el artículo 2, apartados b) y c), interpretados junto con los artículos 1 y 3 de la Convención.

8.6 En cuanto a la afirmación de la autora de que se produjo una violación del artículo 5, apartado a), y del artículo 16, apartados 1 c), d), f) y g) de la Convención, el Comité observa que abordó esos artículos en su recomendación general núm. 19 (1992), relativa a la violencia contra la mujer. En su recomendación general núm. 21, el Comité destacó que las disposiciones de la recomendación general núm. 19 (1992) eran de gran importancia para que la mujer pudiera disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con los hombres. En muchas ocasiones ha afirmado que la concepción tradicional de que las mujeres están supeditadas a los hombres favorece la violencia contra ellas. Respecto al caso que el Comité tiene ante sí, observa que al emitir una orden de protección de emergencia y adoptar otras decisiones, las autoridades del Estado parte se basaron en la declaración y acciones del marido, pese a ser conscientes de la posición vulnerable de la autora y su dependencia de él. El Comité observa también que las autoridades basaron sus actividades en la idea estereotipada de que el marido era superior y el único cuyas opiniones debían tenerse en cuenta, y no consideró que la violencia doméstica afecta proporcionalmente a muchas más mujeres que hombres. El Comité observa también que la autora fue separada de su hija durante un período de casi ocho meses, durante el cual no recibió ninguna información sobre los cuidados que estaba recibiendo su hija ni se le otorgaron derechos de visita. En tales circunstancias, el Comité considera que tanto la autora como su hija fueron víctimas de discriminación por motivo de género, ya que el

Estado parte no protegió la igualdad de derechos de la autora en el matrimonio y como madre ni consideró que los intereses de su hija eran lo más importante. Teniendo en cuenta el hecho de que la orden de protección de emergencia que separó a la autora de su hija se emitió sin considerar los anteriores incidentes de violencia doméstica ni la afirmación de la autora de que en realidad su hija y ella eran las que necesitaban protección contra la violencia doméstica, así como el hecho de que el Tribunal Regional de Sofía no anuló la orden de protección de emergencia después de que se rechazó la petición de que se dictara una orden de protección permanente, el Comité llega a la conclusión de que el Estado parte no adoptó todas las medidas apropiadas que le imponen el artículo 5, apartado a) y el artículo 16, apartados 1 c), d) y f) de la Convención.

8.7 El Comité desea reconocer que la autora y su hija han sufrido graves daños y perjuicios morales y pecuniarios. La autora tuvo que continuar una relación con un marido violento porque estaba en una posición vulnerable y no recibió una protección adecuada. La autora y su hija fueron separadas forzosamente durante un periodo considerable. Además, el Comité ha tomado nota de la declaración de la autora de que tuvo que aceptar el divorcio en condiciones desfavorables para obtener la custodia de su hija.

8.8 El Comité, actuando en virtud del artículo 7, párrafo 3, del Protocolo Facultativo de la Convención, y teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, dictamina que el Estado parte no ha cumplido con sus obligaciones y, por tanto, ha vulnerado los derechos que confieren a la autora y su hija el artículo 2, apartados b), c), d), e), y f), y el artículo 5, apartado a) y el artículo 16, apartados c), d) y f), interpretados junto con los artículos 1 y 3 de la Convención y hace las siguientes recomendaciones al Estado parte:

1. En relación con la autora de la comunicación y su hija:

Proporcionarles una indemnización adecuada, acorde con la gravedad de la violación de sus derechos;

2. En general:

a) Adoptar medidas para asegurarse de que las mujeres víctimas de la violencia doméstica, en particular las mujeres migrantes, tengan acceso efectivo a los servicios relacionados con la protección de la violencia doméstica y la justicia, incluidos servicios de interpretación o de traducción de documentos, y de que la manera en que los tribunales nacionales aplican el derecho sea coherente con las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención;

b) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para asegurarse de que, en la determinación de la custodia y los derechos de visita de los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia y no se pongan en peligro los derechos y la seguridad de la víctima o de los hijos;

c) Impartir capacitación apropiada y periódica sobre la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, con una perspectiva de género, teniendo debidamente en cuenta las formas múltiples de discriminación, a jueces, fiscales, personal de la Agencia Estatal de Protección del Niño y agentes de mantenimiento del orden, a fin de asegurarse de que las denuncias de violencia doméstica basada en el género se reciban y examinen adecuadamente;

8.9 De conformidad con el artículo 7, párrafo 4 del Protocolo Facultativo, el Estado parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que se haya adoptado en relación con las opiniones y recomendaciones del Comité. Asimismo, se pide al Estado parte que publique las opiniones y recomendaciones del Comité, y disponga que se difundan ampliamente para que lleguen al conocimiento de todos los sectores pertinentes de la sociedad.

---